

## Editorial

### Vida cara e insegura

El costo de la vida y la delincuencia organizada aparecen en las encuestas del Instituto de Opinión Pública de la UCA como dos grandes problemas sociales sobre el telón de fondo de la militarización persistente y del modelo económico antisocial. Con toda razón nos hacemos la pregunta: acuerdos de paz o recuerdos de la paz? A medida que avanzamos sobre el segundo semestre del año ciertos grupos influyentes hacen los mayores esfuerzos por relegar al olvido los acuerdos de paz, especialmente el proceso pactado de desmilitarización y las recomendaciones ético-jurídicas de la Comisión de la Verdad. La consigna de perdón y olvido se está transformando en olvido del perdón y en cegar la memoria de un pasado de impunidad.

Con ocasión de la fiesta del soldado, altos miembros de la cúpula militar allá presentes, y también presentes en el informe de la Comisión de la Verdad, se hicieron acreedores del reconocimiento general por su comportamiento "francamente encomiable" y su colaboración al proceso de paz en la mesa de negociaciones. El reconocimiento se hizo acompañar del más normal de los retiros con unas anormales jubilaciones. Algunas semanas después los Ministros de Defensa del Istmo autoevaluaron que los ejércitos no pueden reducir su actual tamaño por razones de seguridad interna nacional. No es ésta la tesis popular, en el sentido más amplio de apreciación ciudadana, que ve en los presupuestos militares y en sus partidas secretas el gasto más gravoso, improductivo y gestador de corrupción que pesa sobre estas pobres y endeudadas naciones.

La ironía del año preelectoral es que se están politizando las reser-

vas de armas escondidas o no declaradas al mismo tiempo que se echa el velo del olvido sobre la cronología de la violencia que gestó el uso de dichas armas y que se prolonga en la terrible delincuencia y en la fundada presencia de los escuadrones de la muerte. No vamos a repetir que la desdichada historia de los buzones de armas ha mermado la confiabilidad de grupos integrantes del FMNL como pesado gravamen en el próximo proceso electoral. Pero lo que resulta éticamente insopor- table es que se alcen como los más puritanos fiscales aquellos miembros del partido y gobierno que apresurada y minoritariamente forzaron la ley de amnistía. Esto es ver la mota de polvo en el ojo ajeno y ocultar la viga del ojo propio. Cómo se explica una delincuencia que utiliza armas pesadas y granadas del ejército, que roba y cambia placas de los carros y los traslada de país a país, o que, del parecer de la ONUSAL, testimonia la presencia de escuadrones de la muerte?. Constitucional o no constitucional, la presencia vigilante del ejército en el campo y el asentamiento de un cuerpo de la armada americana no ha recibido el beneplácito de la mayoría popular, aunque algunos transportistas confíen en dicha protección. El historial del ejército, sobre todo cuerpos de seguridad, ha socavado la confiabilidad que el pueblo pueda tener en ellos y se resiste a seguir pagando unos onerosos impuestos para cubrir la exagerada partida de defensa-seguridad.

Parecería, y así se dijo en reciente programa televisado, A FONDO, que el gobierno no empeña las medidas más eficientes para controlar la delincuencia con la oculta intención de justificar la presencia militar en campos y carreteras de la nación. Las preguntas no carecen de razón : por qué la policía nacional civil no se transfiere de las zonas ex-conflictivas a las zonas, hoy por hoy, más conflictivas? Por qué no se les dota del equipo, vehículos y presupuesto no tan eficazmente utilizado en otras instituciones de defensa y seguridad ?

Por supuesto que el flajelo de la delincuencia no se reduce a menos armas y más policías civiles porque tiene raíces económicas (desempleo y desadaptación profesional), raíces de resentimiento y venganza y también raíces culturales y psicológicas. Por esta razón ha sido un gran error político, cívico y ético querer cegar el informe de la Comisión de la Verdad con la precipitada ley de perdón y olvido. La cronología de la violencia ha marcado las conciencias y la conducta de quienes ejercieron impunemente la pena de muerte. Al negarse a cumplir con las recomendaciones pactadas, miembros o exmiembros del ejército o cuerpos de seguridad, al igual que la administración de justicia, no han cobrado conciencia de los errores cometidos. Se imposibilita el proceso de reeducación civil. Conviene recordar que el informe de la Comisión de la Verdad lo redactaron ,en equipo, los tres miembros propuestos por la

ONU y aceptados por el gobierno; pero quien hizo el informe fue el pueblo declarante, los más de 20.000 testimonios que dijeron la verdad. Ahora nos toca a todos los miembros de la sociedad ( familia, colegios-universidades, iglesias, asociaciones sindicales y patronales, partidos y administración pública... ) rescatar los mejores valores y criterios cívicos, lo cual es más lento y difícil que asfaltar carreteras. Sin embargo el gobierno puede hacer más lento este proceso si propicia la persistente militarización . La operación quirúrgica es difícil, pero es necesaria; hasta el momento, con aciertos y tropiezos, el FMNL está dando mejor ejemplo. Al fin y al cabo, el error y la mentira se hizo sobre "armas escondidas fuera o bajo tierra". La delincuencia trabaja con armas de aquí y de origen sospechoso y lo hace a la luz del sol.

Con las repetidas acusaciones y revelaciones sobre las armas escondidas del FMNL y sus conexiones terroristas (léase ETA) el gobierno olvida sus más prolongadas conexiones con el anterior gobierno de los EE.UU., que le nutrió con muchas más armas mortíferas, le adoctrinó con sus asesores de la muerte y le entrenó los escuadrones ad-hoc durante doce años. Estas atrocidades no se convierten en hechos éticos por la simple razón de que se planifican entre gobiernos oficialmente reconocidos. Son más bien los hechos los que testimonian de la eticidad de los gobiernos. Por otra parte, este olvido del pasado y estas acusaciones del presente sirven como cortinas de humo para distraer del problema económico-social gestado por el modelo neoliberal.

Es aleccionador que CENITEC en su "propuesta de un programa económico-social de consenso para El Salvador", introduzca el manejo de la política macroeconómica con la premisa del "cumplimiento satisfactorio de los acuerdos de paz". Se trata de una visión económico-social de dichos acuerdos." Las implicaciones de este supuesto en términos de la viabilidad de nuestra propuesta son de suma importancia. En primer lugar, significa que la crisis política tenderá a superarse y, por tanto, que el país contará en los próximos años con un clima de estabilidad política y social mínimo que coadyuvará favorablemente al establecimiento de un ambiente adecuado para la inversión privada, tanto nacional como extranjera. En segundo lugar, significa que el país seguirá contando , si bien con una tendencia decreciente, con el apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional en los esfuerzos de la reconstrucción nacional. En tercer lugar, significa que la asignación del gasto público y la nueva inversión en infraestructura social serán determinadas de manera creciente por consideraciones económicas y sociales y que será posible reorientar progresivamente el gasto militar hacia los gastos sociales"... (Economía Política; No.17; p. 26)

En páginas anteriores , con el título de "las frágiles bases del actual programa económico", sostiene lo que la mayoría, menos uno, afirma en sus encuestas abiertas: "el déficit del desarrollo social." En cuanto al segundo desafío, es decir a la necesidad de construir nuevos equilibrios distributivos que permitan superar en un tiempo razonable los graves problemas sociales y de concentración del ingreso en el país, el déficit del actual programa económico es aún mayor, ya que prácticamente se ha carecido de una estrategia para enfrentarlo. Como ha sido señalado repetidas veces , el actual programa no ha sido acompañado de una política social integral y complementaria a la estrategia económica. Resulta revelador en tal sentido comprobar que el gasto social y el salario mínimo real solamente han experimentado incrementos marginales. (Gráficos 5 y 6).

La debilidad del programa gubernamental en la parte social se debe a la visión del "derrame" que subyace en la propuesta global. Según esta visión, los objetivos del crecimiento y la distribución son incompatibles en el corto plazo , razón por la cual se plantea la necesidad de buscar primero el crecimiento y sólo después enfrentar el problema de la distribución. Dicho de otro modo, esta visión parte de la premisa de que los beneficios del crecimiento se derramarán automáticamente desde los estratos de mayores ingresos hacia los estratos de menores ingresos de la población. Con esa visión no puede sorprender que el programa económico no contemple mecanismos institucionales que permitan la distribución equitativa del excedente y que, por el contrario, el resultado de la política general y de las políticas específicas como la de la privatización de la banca, haya sido una mayor concentración del ingreso y de la riqueza"... (Ibidem; pp. 9-10)

CENITEC traduce técnicamente el sentimiento ciudadano manifestado en repetidas encuestas y entrevistas. El pasado mes de junio el Instituto Universitario de Opinión Pública-UCA sondea la opinión de los salvadoreños sobre el proceso electoral. La encuesta parece indicar que la población se mueve entre la esperanza y la desilusión. Un 80% afirma su intención de votar, aunque un 25% de este grupo no poseen, de momento, su carnet electoral. La indecisión popular se traduce en que un 51,1% de quienes desean votar dicen no tener un partido de preferencia , y casi una tercera parte de la misma población juzga que ningún partido es capaz de luchar contra los problemas de la pobreza, del respeto y defensa de los Derechos Humanos.

A algunos secretarios y precandidatos de los partidos políticos les interesa más la cota de apreciación tributada por los encuestados y si su nombre sube o baja como corcho que flota en el termómetro de la opi-

nión pública. A ellos y a nosotros debieran preocuparnos más los problemas develados en las encuestas. El problema número uno es el deterioro económico-social, en sus variados componentes: alto costo de la vida (30,3%); la falta de empleo (15,3%); la pobreza-injusticia social (15,3%); los problemas de salud-educación (3,5%). Sumando porcentajes, un 64% de los votos hace del deterioro económico el problema número uno. Pero no sólo de pan malvive el hombre; al costo de la vida se añade la inseguridad de seguir viviendo; la delincuencia y las drogas aparecen como el segundo problema en la acumulación de votos. (IUDOP; Boletín, No.3; p.5...)

Estos datos son tanto más fehacientes por cuanto muestran una opinión permanente. En la encuesta pasada por el IUDOP en octubre de 1992 se reagrupan en orden similar los principales problemas del El Salvador. "La pobreza, desempleo y bajos salarios (47,1%); la crisis económica y social (40,7%); la inflación, alto costo de la vida (25,8%); la ley del IVA (10,1%); la delincuencia (22,2%); el proceso de paz, la postguerra, la reconciliación nacional (16,2%)." En este entorno del octubre-1992 el 83,1% opinaba que la situación económica estaba igual o peor que antes de los acuerdos de paz; y la mitad de los encuestados (49,7%) se adelantaba a decir que estaría peor dentro de un año, opinión avalada por la reciente encuesta (junio-1993) antes citada, (IUDOP; Boletín, No. 1, 1992 p. 3). Todos estos datos, fruto de la opinión pública, retroalimentan los breves párrafos extractados del programa de consenso económico-social propuesto por CENITEC.

Hemos titulado este editorial "Vida cara e insegura" apegados al sentimiento ciudadano. En el mes de julio-1993 de nuevo el IUDOP recaba la opinión pública sobre la Comisión de la Verdad, a la que dedicamos la Editorial del No. 32 (La verdad os hará libres). Por su extensión no es lectura fácil, ni por su contenido es lectura agradable el Informe de la Comisión de la Verdad; como dijo el Dr. Francisco Lima, las lágrimas saltan a los ojos. Si las cúpulas del partido-gobierno quisieron desprestigiarlo hasta el calificativo de estupidez, "el 45% de los salvadoreños están satisfechos con el informe presentado por la Comisión de la Verdad, mientras que un 28% están insatisfechos, y otro porcentaje igual prefiere no opinar" ( IUDOP, Boletín No. 2, 1993)

Detallando un poco más la razón del voto casi la mitad de quienes se muestran conformes (46,5%) piensa que el contenido del informe es lo que realmente pasó; el 58% de las personas satisfechas afirma que el informe presentó a los responsables y divulgó lo que no se sabía. También es interesante analizar las razones expresadas por el 28% insatisfechos con el informe: no menciona algunos crímenes (39,7%); falta

investigar, es superficial (15%); estuvo más de un lado que del otro (8,4%); es mentiroso (8,4%). Cuál es la base histórica de estos argumentos? Cuando en sólo seis meses de intenso trabajo la Comisión de la Verdad devela toda una cronología de la violencia y en un muestreo ampliamente representativo analiza con el mayor detalle treinta casos de atrocidades personales o comunitarias, cuando basa sus investigaciones "en pruebas abrumadoras, sustanciales y suficientes", fundadas en más de 20.000 declaraciones populares, enmarcado todo ello en los protocolos del Derecho Internacional firmados por nuestro país, y cuando en doce años nuestro órgano oficial judicial no había avanzado más allá de la promesa "se harán investigaciones exhaustivas", no son verdaderas razones las emitidas por el minoritario grupo de los inconformes. Hay un detalle iluminador: los votos de quienes apoyan el informe se concentran en el medio obrero marginal, en el sector social medio-bajo y en el área rural. Los insatisfechos se sitúan en el grupo social medio-alto del área urbana. "Dime con quién andas y te diré quién eres": la dirigencia de ARENA no anda con el pueblo que ha sufrido más con la cronología de la violencia y con la impunidad de sus autores.

El reverso concuerda con el anverso: 55,5% de la población encuestada está en contra de la Ley de Amnistía. La razón es que debe haber justicia y que los culpables deben ser castigados. El pasado siguen siendo presente: casi la mitad (46,17%) de este grupo afirma que la impunidad no ha terminado. De cara al futuro, tres de cada cuatro entrevistados (78,7%) se muestran a favor de remover de sus cargos a los funcionarios que han violado los derechos humanos. Casi dos tercios de la población encuestada (63 %) piensa que al pueblo salvadoreño se le ha engañado de forma masiva en asuntos de violación de los derechos humanos. En los sectores altos de la sociedad salvadoreña se ubica el 30% favorable a la ley de amnistía; razón, la importancia del perdón-olvido para la reconciliación, y porque toda persona tiene derecho a otra oportunidad. Por desgracia, la historia nos muestra que la otra oportunidad es la corrupción y la delincuencia organizada; no han cambiado ni las conciencias ni las conductas.

Hemos definido la inflación como una guerra civil monetaria con el arma de los precios. La guerra duró doce años y la inflación ya cumplió los veinte. Estos fenómenos, más que coyunturales, han modelado nuestras conductas de agresividad política y económica. El modelo neoliberal ha generado hasta el momento el "derrame de la desigualdad" y la delincuencia organizada multiplica la inseguridad. La población desea cambiar para mejorar, pero las lentitudes del tribunal electoral dificulta su derecho a votar, y las controversias de los partidos políticos su derecho a elegir. Aún nos queda medio año para acudir a las urnas y elegir un

futuro que no sea prolongación del presente y del pasado. La propaganda prepotente nos quiere hacer olvidar el pasado de la violencia impune y el presente de la economía antisocial. La solución no lloverá desde arriba, a imagen de unas elecciones que se harán en la época seca. Todas las fuerzas sociales debemos develar la verdad del pasado-presente y pasar de la protesta a la propuesta de las nuevas soluciones que ya comienzan a delinearse.

